

**Pacto Internacional de Derechos  
Civiles y Políticos**

Distr. general  
17 de diciembre de 2015  
Español  
Original: francés

**Comité de Derechos Humanos****Comunicación núm. 2621/2015****Decisión adoptada por el Comité en su 115º período de sesiones  
(19 de octubre a 6 de noviembre de 2015)**

<i>Presentada por:</i>	J. P. D. (representado por la abogada Isabelle Coutant Peyre)
<i>Presunta víctima:</i>	El autor
<i>Estado parte:</i>	Francia
<i>Fecha de la comunicación:</i>	3 de septiembre de 2012 (presentación inicial)
<i>Referencias:</i>	Decisión del Relator Especial con arreglo al artículo 97 del reglamento, transmitida al Estado parte el 12 de septiembre de 2013 (no se publicó como documento)
<i>Fecha de adopción de la decisión:</i>	2 de noviembre de 2015
<i>Asunto:</i>	Derecho a un juicio imparcial; complicidad del Estado parte; trato inhumano y degradante
<i>Cuestiones de procedimiento:</i>	Falta de fundamentación de la reclamación; sometimiento del mismo caso a otro procedimiento de examen o arreglo internacional
<i>Cuestiones de fondo:</i>	Ninguna
<i>Artículos del Pacto:</i>	7; y 14, párr. 1
<i>Artículos del Protocolo Facultativo:</i>	2; y 5, párr. 2 a)



## Anexo

### **Decisión del Comité de Derechos Humanos en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (115º período de sesiones)**

respecto de la

#### **Comunicación núm. 2621/2015\***

*Presentada por:* J. P. D. (representado por la abogada Isabelle Coutant Peyre)

*Presunta víctima:* El autor

*Estado parte:* Francia

*Fecha de la comunicación:* 3 de septiembre de 2012 (presentación inicial)

*El Comité de Derechos Humanos*, establecido en virtud del artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

*Reunido* el 2 de noviembre de 2015,

*Habiendo concluido* el examen de la comunicación núm. 2621/2015 presentada al Comité de Derechos Humanos por J. P. D. en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

*Habiendo tenido en cuenta* toda la información que le han presentado por escrito el autor de la comunicación y el Estado parte,

*Adopta* la siguiente:

#### **Decisión sobre la admisibilidad**

1.1 El autor de la comunicación, de fecha 3 de septiembre de 2012, es J. P. D., nacido el 6 de febrero de 1945 en Lodève (Francia). Fue internado del 1 de abril al 23 de mayo de 1969, en contra de su voluntad, en la unidad psiquiátrica de un hospital asociado al centro hospitalario universitario de Montpellier. Sostiene que Francia violó los artículos 7 y 14, párrafo 1, del Pacto. Está representado por la abogada Isabelle Coutant Peyre.

1.2 El 15 de junio de 2015, el Relator Especial sobre nuevas comunicaciones y medidas provisionales decidió que no era necesario que el Estado parte presentara sus observaciones para pronunciarse sobre la admisibilidad de la comunicación.

#### **Los hechos expuestos por el autor**

2.1 El 26 de enero de 1968, el autor escribió a la asociación Gran Oriente de Francia solicitando su admisión como “joven interesado en las emisiones radiofónicas

---

\* Participaron en el examen de la comunicación los siguientes miembros del Comité: Yadh Ben Achour, Lazhari Bouzid, Sarah Cleveland, Olivier de Frouville, Ahmed Amin Fathalla, Yuji Iwasawa, Ivana Jelić, Duncan Laki Muhumuza, Photini Pazartzis, Mauro Politi, Sir Nigel Rodley, Víctor Manuel Rodríguez Rescia, Fabián Omar Salvioli, Dheerujall Seetulsingh, Anja Seibert-Fohr, Yuval Shany, Konstantine Vardzelashvili y Margo Waterval.

difundidas por la asociación”. El 25 de abril de ese mismo año, el Secretario General del Gran Oriente de Francia, M. C., le respondió por carta que se había ocupado de su candidatura y que se la había transmitido a “sus amigos” de Montpellier para que realizaran una “investigación preliminar” sobre el autor.

2.2 M. C. citó al autor el 2 de mayo de 1968. Al no tener noticias después de ese encuentro, el autor decidió escribir a la sede del Gran Oriente de Francia. El 25 de julio de 1968, recibió una respuesta del Secretario de la asociación en la que le comunicaba que su candidatura había sido aceptada. Poco después, el autor supo que M. C. había dado a entender a sus padres que, cuando se reunieron, el autor llevaba explosivos.

2.3 El 1 de abril de 1969, M. C. organizó una consulta psiquiátrica para el autor con el jefe del servicio de psiquiatría dependiente del centro hospitalario regional de Montpellier. El autor denuncia que fue internado<sup>1</sup> en contra de su voluntad en esa misma fecha, por un período de 53 días, en la unidad psiquiátrica. Afirma que fue sometido a diez sesiones de tratamiento electroconvulsivo que le provocaron epilepsia y a un tratamiento violento al administrársele varios potentes neurolépticos. En la respuesta de 25 de marzo de 2013 a la carta de la Sección de Peticiones e Investigaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el autor sostiene que la decisión de las autoridades francesas fue manifiestamente arbitraria y parcial, ya que evidenció que estaban “claramente de parte de la asociación Gran Oriente de Francia”. Además, denuncia que los tribunales franceses consideraron erróneamente que no había pruebas de connivencia entre M. C. y el jefe de la unidad de psiquiatría, aunque admitieron la existencia de vínculos entre ellos. El autor destaca también que el Tribunal de Apelación negó, a pesar de las pruebas en contrario, que existiera un acuerdo para internarlo de manera ilegal.

2.4 El 6 de junio de 1994, el autor presentó ante el Tribunal Administrativo de Montpellier un recurso de anulación de la decisión de 1 de abril de 1969 relativa al ingreso en la unidad psiquiátrica del centro hospitalario universitario de Montpellier. Su solicitud fue denegada el 25 de noviembre de 1998. El 4 de febrero de 1999, el autor apeló contra esa decisión.

2.5 El 30 de junio de 1995, el autor presentó una demanda por daños y perjuicios contra el centro hospitalario universitario de Montpellier y la Hacienda Pública ante el Tribunal de Primera Instancia de París por los daños sufridos como consecuencia de su internamiento ilegal.

2.6 El 27 de junio de 2002, el Tribunal Administrativo de Apelación de Marsella anuló la sentencia del Tribunal Administrativo de Montpellier al considerar que, teniendo en cuenta los documentos presentados por el centro hospitalario universitario, el ingreso y el mantenimiento del autor en la unidad psiquiátrica habían sido irregulares.

2.7 El 27 de junio de 2005, el Tribunal de Primera Instancia de París declaró que el internamiento del autor había sido “abusivo” y condenó al centro hospitalario universitario a pagar 23.000 euros por “el sufrimiento moral derivado de ser percibido

<sup>1</sup> En su sentencia de 27 de junio de 2005, el Tribunal de Primera Instancia de París subrayó que la solicitud de ingreso había sido firmada por el padre del autor, a pesar de que ya era mayor de edad. Además, el padre del autor autorizó a los médicos a someter a su hijo a “todos los tratamientos y exámenes necesarios”. El tribunal reconoció que el autor no había aceptado libremente su internamiento.

como deficiente mental por las personas de su entorno y los efectos del trato recibido”<sup>2</sup>.

2.8 El 2 de febrero de 2007, el autor demandó a la asociación Gran Oriente de Francia ante el Tribunal de Primera Instancia de París al que solicitó una condena y una reparación.

2.9 El 11 de diciembre de 2007, el Tribunal de Primera Instancia de París desestimó la excepción de prescripción opuesta por la asociación Gran Oriente de Francia, pero denegó todas las solicitudes del autor porque “no aportaba ningún elemento de prueba de los hechos imputados a M. C.”. El 23 de octubre de 2009, el Tribunal de Apelación de París confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. El 17 de febrero de 2011, el Tribunal de Casación declaró que no admitía el recurso<sup>3</sup>.

2.10 El 4 de mayo de 2002, el autor interpuso una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El 7 de febrero de 2006, el Tribunal condenó a Francia por demora excesiva en la presentación del expediente relativo al internamiento de la víctima. El Tribunal consideró que la duración del proceso había sido excesiva y que no se había cumplido el requisito de “plazo razonable”, de modo que Francia había infringido los artículos 6, párrafo 1, y 13 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. El autor se opone a la sentencia porque considera que la decisión omitió la sanción al Estado por el trato inhumano que se le había infligido. El autor subraya que no ha recibido ninguna reparación por el trato inhumano sufrido<sup>4</sup>.

### **La denuncia**

3.1 El autor considera que el Estado parte ha violado el artículo 14, párrafo 1, del Pacto al negarse a juzgar la responsabilidad civil de la asociación Gran Oriente de Francia, que había sido responsable de su internamiento arbitrario e ilegal. Sostiene que la decisión del Tribunal de Apelación de París niega la existencia de un acuerdo para organizar su internamiento ilegal, en violación de sus derechos fundamentales.

3.2 El autor considera también que los tribunales nacionales han errado al no reconocer la actuación del responsable de la asociación como causa inicial del trato inhumano que había recibido. Estima que se le privó de la posibilidad de invocar su derecho a la reparación del perjuicio sufrido porque los jueces no reconocieron la responsabilidad de la asociación Gran Oriente de Francia.

3.3 Por último, el autor considera que el Estado parte violó el artículo 7 del Pacto, ya que se convirtió en cómplice de los abusos inhumanos y degradantes de que fue víctima.

---

<sup>2</sup> Este análisis fue presentado por el autor el 3 de septiembre de 2012 ante el Comité de Derechos Humanos y en la respuesta de 25 de marzo de 2013 a la carta de 5 de septiembre de 2012 de la Sección de Peticiones e Investigaciones de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. En su carta de 25 de marzo de 2013, el autor dice que Francia le había concedido una indemnización por su “detención ilegal” y que no se había concedido ninguna indemnización por el trato inhumano a que fue sometida la víctima.

<sup>3</sup> No se proporciona información sobre la fecha en que el autor interpuso el recurso de casación.

<sup>4</sup> En su sentencia de 7 de mayo de 2006, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no encontró ningún nexo de causalidad entre la violación constatada y el daño material alegado, por lo que desestimó la solicitud del autor de una indemnización de 15.000 euros por daños materiales. El Tribunal consideró que la prolongación del proceso más allá de un plazo razonable probablemente ocasionó al autor molestias y una incertidumbre prolongada que justificaban una indemnización por daños morales. Teniendo en cuenta las circunstancias del caso, el Tribunal otorgó al autor la suma de 3.000 euros.

## Deliberaciones del Comité

### *Examen de la admisibilidad*

4.1 El Comité de Derechos Humanos debe decidir, de conformidad con el artículo 93 de su reglamento, si la comunicación es o no admisible en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto.

4.2 En cumplimiento de lo exigido en el artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo, el Comité debe cerciorarse de que el mismo asunto no está siendo examinado en el marco de otro procedimiento de examen o arreglo internacional. El Comité observa que el 7 de febrero de 2006, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que el proceso incoado por el autor había tenido una duración excesiva y no había cumplido el requisito de un “plazo razonable”, en violación de los artículos 6, párrafo 1, y 13 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. El Comité recuerda además que, en el momento de su adhesión al Protocolo Facultativo, el Estado parte formuló una reserva al artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo en que indicaba que el Comité no tendría competencia para examinar comunicaciones de un individuo cuando el mismo asunto estuviese siendo o hubiera sido examinado en el marco de otro procedimiento de examen o arreglo internacionales.

4.3 El Comité recuerda su jurisprudencia, según la cual, en el sentido del artículo 5, párrafo 2 a), se debe entender que el “mismo asunto” corresponde a los mismos autores, los mismos hechos y los mismos derechos esenciales<sup>5</sup>. Observa que la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 7 de febrero de 2006 se refería a la demanda interpuesta por el mismo autor, estaba basada en los mismos hechos y guardaba relación con el derecho a un proceso imparcial por idénticas razones que las expuestas por el autor al presentar la denuncia en virtud del artículo 14, párrafo 1, del Pacto.

4.4 El Comité observa que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos justificó la declaración de inadmisibilidad de la parte de la demanda del autor relativa a la solicitud de una indemnización de 15.000 euros por daños materiales en la inexistencia de un nexo de causalidad entre la violación constatada y el daño material alegado. El Comité considera que ese análisis forma parte del examen del asunto y concluye que el Tribunal Europeo ya ha examinado el mismo asunto a los efectos de la reserva formulada por el Estado parte. Por lo tanto, el Comité no puede examinar la presente comunicación debido a la reserva formulada por el Estado parte con respecto al artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo.

4.5 En cuanto a la denuncia del autor de que el Estado parte violó el artículo 7 del Pacto al participar como cómplice en los abusos inhumanos y degradantes de que fue víctima, el Comité observa que el autor no aporta ningún elemento que fundamente su denuncia. El Comité observa también que los tribunales del Estado parte condenaron al centro hospitalario universitario de Montpellier a pagar una indemnización de 23.000 euros al autor por los tratos inhumanos y degradantes a que fue sometido durante su hospitalización. Por lo que respecta a la solicitud del autor en relación con el enjuiciamiento de la asociación Gran Oriente de Francia, el Comité constata que los hechos fueron examinados por el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelación de París, que consideraron que sus alegaciones eran inadmisibles porque no estaban suficientemente fundamentadas. Esas alegaciones también fueron desestimadas por el Tribunal de Casación, que no admitió el recurso. El Comité recuerda su jurisprudencia según la cual corresponde en general a los tribunales de los

<sup>5</sup> Véanse las comunicaciones núm. 1793/2008, *Marin c. Francia*, decisión de inadmisibilidad adoptada el 27 de julio de 2010, párr. 6.3; y núm. 998/2001, *Althammer y otros c. Austria*, dictamen aprobado el 8 de agosto de 2003, párr. 8.4.

Estados partes valorar los hechos y la pruebas, a menos que pueda demostrarse que el desarrollo del juicio o la evaluación de los elementos probatorios fueron manifiestamente arbitrarios o equivalentes a una denegación de justicia<sup>6</sup>. Sobre la base de la documentación que se ha puesto a su disposición, el Comité no puede llegar a la conclusión de que las autoridades del Estado parte actuaran de modo arbitrario en la evaluación de los hechos y las pruebas del caso, y considera que la reclamación no está suficientemente fundamentada con arreglo al artículo 2 del Protocolo Facultativo<sup>7</sup>.

5. Por lo tanto, el Comité decide:

a) Que la comunicación es inadmisibile en virtud del artículo 2 y del artículo 5, párrafo 2 a), del Protocolo Facultativo;

b) Que la presente decisión se ponga en conocimiento del autor de la comunicación y del Estado parte.

---

<sup>6</sup> Véase la observación general núm. 32 (2007) del Comité de Derechos Humanos sobre el derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia (artículo 14), párr. 26. Véanse también, entre otras, las comunicaciones núm. 1943/2010, *H. P. N. c. España*, decisión de inadmisibilidad adoptada el 25 de marzo de 2013; núm. 1500/2006, *M. N. y otros c. Tayikistán*, decisión de inadmisibilidad adoptada el 29 de octubre de 2012; núm. 1210/2003, *Damianos c. Chipre*, decisión de inadmisibilidad adoptada el 25 de julio de 2005, párr. 6.3; núm. 1212/2003, *Lanzarote Sánchez y otros c. España*, decisión de inadmisibilidad adoptada el 25 de julio de 2006, párr. 6.3; núm. 1358/2005, *Korneenko c. Belarús*, decisión de inadmisibilidad adoptada el 1 de abril de 2008, párr. 6.3; y núm. 1758/2008, *Jessop c. Nueva Zelanda*, dictamen aprobado el 29 de marzo de 2011, párrs. 7.11 y 7.12.

<sup>7</sup> Véanse las comunicaciones núm. 1771/2008, *Gbondó Sama c. Alemania*, decisión de inadmisibilidad adoptada el 28 de julio de 2009, párr. 6.9; y la comunicación núm. 1537/2006, *Gerashchenko c. Belarús*, decisión de inadmisibilidad adoptada el 23 de octubre de 2009, párr. 6.4.